



INSTRUCCIONES:

- 1- Se procederá al reparto de los exámenes y las hojas de respuesta, no pudiéndose iniciar la lectura del ejercicio hasta que no sea indicado por el Tribunal.
- 2- La duración del ejercicio será de 100 minutos.

Cualquier solicitud de salida puntual por motivos justificados de urgencia requerirá la previa autorización del miembro del Tribunal responsable del aula y en todo caso por el tiempo imprescindible y sin documento de ningún tipo.

- 3- El desarrollo de la/s prueba/s se sujetará en todo caso a las instrucciones que proporcione el Tribunal, pudiendo excluir del proceso selectivo a aquel/la aspirante que incumpla las mismas de forma reiterada o actúe con manifiesta falta de respeto o decoro.
- 4- Lo/as opositores/as deberán ir provistos del DNI, o en su defecto, pasaporte, así como de bolígrafo. El Tribunal no facilitará material alguno.
- 5- El presente ejercicio, de carácter eliminatorio, consiste en contestar por escrito un cuestionario de 100 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Las 100 primeras preguntas ordinarias y evaluables y las 10 últimas, de la 101 a la 110, ambas incluidas, de reserva, siendo únicamente valoradas en el supuesto de anulación de alguna(s) pregunta(s) anteriores y en el orden correlativo, siendo publicada debidamente dicha circunstancia.
- 6- Criterios de corrección:
 - Las preguntas correctamente contestadas se valoraran 1 punto (+1).
 - Las preguntas incorrectamente contestadas se valorarán con menos 0,33 puntos (-0.33).
 - Las preguntas no contestadas o en blanco se valorarán con menos 0,10 puntos (-0.10).
- 7- El ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos en función del número de puntos obtenidos conforme al régimen de puntuación descrito anteriormente, calculándose proporcionalmente las puntuaciones según el número de preguntas formuladas para cada plaza. En todo caso, serán considerados no aptos los/as aspirantes que hubieran obtenido una puntuación inferior a 5 puntos.
- 8- Las preguntas se contienen en un cuadernillo, en el cual pueden efectuar cuantas anotaciones estimen precisas, pudiéndoselo llevar una vez finalizado el ejercicio. En el deben de anotar el código RS de su hoja de respuestas.



- 9- Las respuestas deberán consignarse en la hoja de respuesta que se les facilitará sin posibilidad de cambio, junto al cuadernillo de preguntas. Esta hoja de respuesta está por triplicado; el original y la primera copia quedan en poder del tribunal y la segunda copia (de color amarillo), en poder del/a aspirante, con la cual podrá comprobar la puntuación obtenida. Las instrucciones para consignar las respuestas, están al dorso de la hoja de examen. Previo al inicio del ejercicio el Tribunal dará las instrucciones pertinentes.
- 10- Una vez recogidos los exámenes, por el Tribunal, se introducirá en sobre cerrado que será precintado con la firma del/la Secretario/a. Los/as aspirantes deberá permanecer sentados/as hasta que el Tribunal de la orden de abandonar la sala.
- 11- El ejercicio será calificado en condiciones de anonimato, a través de códigos identificativos (RS) quedando automáticamente anulados todas aquellas hojas de respuestas en las que consten marcas o signos de identificación personal.
- 12- Tras la realización del ejercicio, el Tribunal de Selección hará pública la Plantilla con las respuestas que servirá para su corrección. Podrá consultarse en la web www.cadiz.es, Persona, y también dentro de la misma página web, pinchando en el icono "Convocatorias Procesos Selectivos". Se dispone de un plazo de dos días hábiles, contados desde el siguiente a su publicación para formular alegaciones a la misma.
- 13- Resueltas, en su caso, las alegaciones presentadas, el Tribunal de selección hará pública la plantilla definitiva que se empleará para la corrección del ejercicio, considerándose desestimadas todas aquellas alegaciones que no se mencionen en la citada publicación. En el supuesto de que debiera anularse una o varias preguntas, en el acuerdo de publicación de la plantilla definitiva se establecerá la sustitución, a efectos de su evaluación, de las anuladas por otras tantas de reserva, por el orden en que se contienen en el ejercicio.
- 14- Finalizada la calificación del ejercicio se expondrá por código identificativo en la página web www.cadiz.es y dentro de la página web, pinchando en el icono "Convocatorias Procesos Selectivos" y se anunciará el día, hora y lugar de apertura pública de los sobres con los códigos de cada examen, y la identidad del/la opositor/a. En dicho acto pueden estar presente si así lo desean los/as aspirantes.
- 15- Si necesita alguna aclaración, por favor, pídala antes de iniciar el examen



PRIMER EJERCICIO

- 1. Según el artículo 10 de la Constitución Española, constituye el fundamento del orden público y de la paz social, el/la/los:**
 - a) Estado social y democrático de derecho.
 - b) Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.
 - c) Legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad Jurídica, responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
 - d) Dignidad de la persona, derechos inviolables que le son inherentes, libre desarrollo de la personalidad, respeto a la ley y a los derechos de los demás.

- 2. Según el artículo 167 de la Constitución Española, los proyectos de reforma constitucional, que no afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, requieren:**
 - a) Aprobación por mayoría de dos quintos de cada una de las Cámaras.
 - b) Aprobación por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.
 - c) Aprobación por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.
 - d) Aprobación de la mayoría absoluta de cada una de las Cámaras.

- 3. El artículo 20 de la Constitución Española señala:**
 - a) La Constitución regulara la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizara el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
 - b) La ley regulara la organización y el control político de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizara el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
 - c) El ordenamiento jurídico regulara la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social independientes del Estado o de cualquier ente público y garantizara el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
 - d) La ley regulara la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizara el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.



4. **Según el artículo 84 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, integran el sector público institucional estatal, entre otras entidades, los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los cuales se clasifican en:**
 - a) Organismos autónomos y entidades públicas empresariales.
 - b) Organismos autónomos, agencias estatales y consorcios.
 - c) Organismos autónomos, fundaciones del sector público y universidades públicas no transferidas.
 - d) Organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales.
5. **Según el artículo 153 de la Constitución Española, el control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá por:**
 - a) Las Cortes Generales en Pleno, el Tribunal Económico Administrativo, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
 - b) El Presidente del Gobierno, oído el Presidente de la Comunidad Autónoma, las Cortes Generales, el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional.
 - c) El Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, el Senado como cámara de representación territorial y el Tribunal de Cuentas.
 - d) El Tribunal Constitucional, el Gobierno, la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y el Tribunal de Cuentas.
6. **Conforme a lo previsto en el artículo 85 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, el órgano supremo de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y los gobiernos locales es:**
 - a) El Consejo Andaluz de Cooperación Local.
 - b) El Consejo Andaluz de Concertación Local.
 - c) El Consejo Andaluz de Gobiernos Locales.
 - d) El Consejo Andaluz de Coordinación de competencias con las Entidades Locales.
7. **Según el artículo 42, de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía (EAA), corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía, las competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas sobre las materias incluidas en el Título II de la citada norma. Las competencias compartidas, comprenden:**
 - a) La potestad legislativa, reglamentaria y la función ejecutiva, en el marco de las bases que fije el Estado en normas con rango de Ley, excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución.
 - b) La potestad legislativa, reglamentaria y la función ejecutiva íntegramente, y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Estado en la Constitución.
 - c) La función ejecutiva que incluye la potestad reglamentaria de su propia administración.
 - d) El desarrollo y la ejecución de la normativa de la Unión Europea.



8. El artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, reconoce al reglamento:

- a) Alcance general, obligando al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios
- b) Alcance particular, obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
- c) Alcance general, obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
- d) Alcance particular, obligando al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios.

9. Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera, de conformidad con el artículo 63 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:

- a) Renuncia a la condición de funcionario, pérdida de la nacionalidad, la jubilación total o parcial del funcionario, la sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme y la pena principal de inhabilitación absoluta para cargo público que tuviere carácter firme.
- b) Renuncia a la condición de funcionario, la jubilación total o forzosa del funcionario, la sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme, y la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme.
- c) Renuncia a la condición de funcionario, recuperación de la nacionalidad, la jubilación total del funcionario, la sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme y la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme.
- d) Renuncia a la condición de funcionario, pérdida de la nacionalidad, la jubilación total del funcionario, la sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme y la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme.

10. El artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que en el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma:

- a) Sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación".
- b) Sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestador incluido en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación".



- c) Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa comunicación a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
- d) Todas son correctas.

11. El derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas se recoge en:

- a) Artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- b) Artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- c) Artículo 13 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- d) Artículo 14 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

12. El artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público establece:

- a) Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias.
- b) El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma.
- c) La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias
- d) Todas las respuestas son correctas.

13. De conformidad con el artículo 39 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, se entiende por Portal de Internet:

- a) El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de Internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente.
- b) La sede electrónica cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de Internet a la información publicada y, en su caso, al punto de acceso general electrónico correspondiente.
- c) El punto de acceso cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente.



- d) La sede electrónica cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, al punto de acceso general electrónico correspondiente.

14. Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, define actuación administrativa automatizada como:

- a) Cualquier acto o actuación realizada a través de medios informáticos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público.
- b) Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público.
- c) Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que haya intervenido de forma directa un empleado público.
- d) Cualquier acto o actuación realizada a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que haya intervenido de forma directa o indirecta un empleado público.

15. Señale la respuesta incorrecta. El artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, señala en relación a la responsabilidad patrimonial:

- a) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
- b) En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
- c) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza expropiatoria de derechos que tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen.
- d) La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

16. Si no recae resolución expresa en un procedimiento de responsabilidad patrimonial, de acuerdo con el artículo 91.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Se podrá entender estimada la solicitud de indemnización.
- b) Se podrá entender que la resolución es contraria a la indemnización del particular.
- c) Se podrá plantear la correspondiente reclamación.



d) Dará lugar a indemnización por daños y perjuicios.

17. De conformidad con el artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público en caso de responsabilidad patrimonial de una Administración Pública, la indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en:

- a) La legislación mercantil.
- b) La legislación civil.
- c) La legislación penal.
- d) La legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado.

18. La Ley 9/2007, de Contratos del Sector Público, señala que están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado sea:

- a) Igual o inferior a 5.538.000 euros.
- b) Igual o superior a 5.538.000 euros.
- c) Igual a 5.538.000 euros.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

19. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público:

- a) Las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general.
- b) Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación.
- c) La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral.
- d) Todas las respuestas son correctas.

20. El artículo 15 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres señala:

- a) El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter general, la actuación de todos los Poderes Públicos.
- b) El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todas las Administraciones Públicas.
- c) El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos.
- d) El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter particular, la actuación de todos los Poderes Públicos.



21. El artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales define riesgo laboral como:

- a) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
- b) Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.
- c) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
- d) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.

22. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, tiene por objeto garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo:

- a) 9.3 de la Constitución.
- b) 18.4 de la Constitución.
- c) 20.5 de la Constitución.
- d) 14 de la Constitución.

23. El artículo “Categorías especiales de datos”, se regula en la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en el siguiente artículo:

- a) Artículo 7
- b) Artículo 8
- c) Artículo 9
- d) Artículo 10

24. Señale la respuesta incorrecta:

- a) Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre cualesquiera materias, siempre que se deleguen de forma expresa.
- b) La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados.
- c) La delegación legislativa deberá otorgarse mediante ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.
- d) Las leyes de bases no podrán facultar para dictar normas retroactivas.



25. Las Cortes podrán tramitar los Decretos Leyes como proyectos de ley:

- a) Por el procedimiento de urgencia y dentro del plazo de los treinta días siguientes a su promulgación.
- b) Por el procedimiento normal o el de urgencia, en el primer caso dentro del plazo de los tres meses siguientes a su promulgación y en el segundo, de veinte días siguientes a su promulgación.
- c) No se pueden tramitar como proyectos de ley hasta que no sea rechazada su convalidación por el Congreso de los Diputados.
- d) Todas las anteriores son incorrectas.

26. La desviación de poder, según el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas es un supuesto de:

- a) Nulidad del acto.
- b) Anulabilidad del acto.
- c) Irregularidad no invalidante.
- d) Todas las anteriores son incorrectas.

27. Una potestad que permite al órgano competente la elección entre diversas opciones, todas admisibles en lo jurídico, siempre que no se incurra en arbitrariedad, se denomina:

- a) Legislativa.
- b) Reglada.
- c) Facultativa.
- d) Discrecional.

28. En el control de la discrecionalidad administrativa ha de tenerse en cuenta:

- a) El control de los elementos reglados del acto discrecional.
- b) El control de los hechos determinantes del acto discrecional.
- c) El control de los Principios Generales del Derecho.
- d) Todas las anteriores son correctas.

29. Cuales de los siguientes no es uno de los derechos del interesado previstos en el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
- b) A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario.
- c) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que no se encuentren en poder de las Administraciones Públicas.



d) A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos.

30. A tenor del artículo 53.a) de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la obligatoria puesta a disposición de copias de los documentos contenidos en los procedimientos respecto al interesado, se entenderán cumplidas cuando:

- a) Se publiquen en el Boletín oficial correspondiente.
- b) Su exposición pública en el Tablón de anuncios de la Administración competente.
- c) Mediante su puesta a disposición en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración competente.
- d) Todas las anteriores son correctas.

31. A tenor del artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no es preceptivo que estén motivados:

- a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
- b) Los actos que resuelvan recursos administrativos.
- c) Los actos que no se separen del dictamen de órganos consultivos.
- d) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.

32. Según Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cómo se presumen los actos administrativos?

- a) Ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015.
- b) Ejecutivos con arreglo a lo dispuestos en la normas reglamentarias.
- c) Ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en la Constitución.
- d) Válidos.

33. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿Quién podrá hacerse cargo de la notificación practicada en el domicilio del interesado de no hallarse presente éste?

- a) Cualquier persona mayor de edad que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.
- b) Cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga consta su identidad.
- c) Cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga consta su identidad.
- d) Cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el domicilio y haga consta su identidad.

34. Establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al hablar de medidas provisionales, la vinculación entre las mismas, cuando se toman antes de la iniciación del procedimiento, y dicho inicio. ¿Qué sucede si no se inicia el procedimiento en el plazo de 15 días tasado?



- a) Que se mantendrán hasta la finalización del procedimiento.
- b) Que podrán ser levantadas, modificadas o suprimidas de oficio.
- c) Que quedarán sin efecto.
- d) Que no podrán adoptarse.

35. ¿Cuándo ya no puede adoptarse la declaración de lesividad de un acto anulable?

- a) Transcurridos 6 meses desde que se dictó.
- b) Transcurridos 2 años desde que se dictó.
- c) Transcurridos 4 años desde que se dictó.
- d) Todas las anteriores son incorrectas.

36. A tenor de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con:

- a) Los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, cuyo conocimiento no esté atribuido a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
- b) Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales.
- c) Las resoluciones dictadas por los Tribunales Administrativos Territoriales de Recursos Contractuales.
- d) Todas las anteriores son correctas.

37. A tenor de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con carácter general, para la defensa de los derechos e intereses de las personas víctimas de discriminación por orientación e identidad sexual, están legitimados:

- a) Los partidos políticos.
- b) Las organizaciones empresariales.
- c) Las asociaciones de personas consumidoras.
- d) Todas las anteriores son incorrectas.

38. A tenor de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que plazo tiene el órgano jurisdiccional para acordar, la acumulación de pretensiones:

- a) En cualquier momento procesal previa audiencia de las partes por plazo común de cinco días.
- b) En cualquier momento procesal, previa audiencia de las partes por plazo común de diez días.
- c) En cualquier momento procesal, previa audiencia de las partes por plazo común de quince días.
- d) En cualquier momento procesal, solo de oficio.



39. A tenor de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra una actuación en vía de hecho:

- a) Si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra una actuación en vía de hecho, el plazo para interponer el recurso será de veinte días a contar desde el día siguiente a la terminación del plazo establecido en el previo requerimiento.
- b) Si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra una actuación en vía de hecho sin requerimiento, el plazo será de diez días desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho.
- c) Si no fuera un acto expreso, el plazo será de tres meses y se contará, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.
- d) Todas las anteriores son incorrectas.

40. A tenor de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, respecto a los convenios firmados por una Administración Pública:

- a) Quedan excluidos de la Ley 40/2015 los convenios interadministrativos suscritos entre dos o más Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas.
- b) No pueden celebrarse con un sujeto de Derecho privado.
- c) Los convenios no pueden tener nunca una duración superior a cuatro años.
- d) Todas las anteriores son incorrectas.

41. En relación a la acción para reclamar por incumplimiento sin causa de la promesa cierta de matrimonio hecha por persona mayor de edad o por menor emancipado sólo producirá la obligación de resarcir a la otra parte de los gastos hechos y las obligaciones contraídas en consideración al matrimonio prometido.

- a) Esta acción prescribe al año contado desde el día de la negativa a la celebración del matrimonio.
- b) Esta acción caducará al año contado desde el día de la negativa a la celebración del matrimonio.
- c) Esta acción caducará a los 5 años desde el día de la negativa a la celebración del matrimonio.
- d) Esta acción prescribe a los 5 años desde el día de la negativa a la celebración del matrimonio.

42. La reclamación de alimentos entre parientes cuando proceda y sean dos o más los obligados a prestarlos, por qué orden se hará según el artículo 144 del Código Civil:

- a) 1º) A los ascendientes, de grado más próximo, 2º) a los descendientes de grado más próximo, 3º) al cónyuge y 4º) a los hermanos.
- b) 1º) A los descendientes de grado más próximo, 2º) a los ascendientes de grado más próximo, 3º) a los hermanos y 4º) al cónyuge.



- c) 1º) A los descendientes de grado más próximo, 2º) al cónyuge, 3º) a los ascendientes de grado más próximo y 4º) a los hermanos.
- d) 1º) Al cónyuge, 2º) a los descendientes de grado más próximo, 3º) a los ascendientes, también de grado más próximo y 4º) a los hermanos.

43. Conforme al artículo 172 del Código Civil, cuando la Entidad Pública a la que, en el respectivo territorio, esté encomendada la protección de los menores, constate que un menor se encuentra en una situación de desamparo, y tiene por ministerio de la ley la tutela del mismo y deba adoptar las medidas de protección necesarias para su guarda, poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal y, en su caso, del Juez que acordó la tutela ordinaria:

- a) La asunción de la tutela atribuida a la Entidad Pública llevará consigo la suspensión de la patria potestad o de la tutela ordinaria, pero serán válidos los actos de contenido patrimonial que realicen los progenitores o tutores en representación del menor y que sean en interés de éste.
- b) La asunción de la tutela atribuida a la Entidad Pública no llevará consigo la suspensión de la patria potestad o de la tutela ordinaria, y serán válidos los actos de contenido patrimonial que realicen los progenitores o tutores en representación del menor y que sean en interés de éste.
- c) La asunción de la tutela atribuida a la Entidad Pública no llevará consigo la suspensión de la patria potestad o de la tutela ordinaria, pero no serán válidos los actos de contenido patrimonial que realicen los progenitores o tutores en representación del menor y que sean en interés de éste.
- d) La asunción de la tutela atribuida a la Entidad Pública llevará consigo la suspensión de la patria potestad o de la tutela ordinaria, pero no serán válidos los actos de contenido patrimonial que realicen los progenitores o tutores en representación del menor y que sean en interés de éste.

44. En relación al internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico, de una persona que no esté en condiciones de decidirlo por sí, aunque esté sometida a la patria potestad o a tutela, que juzgado será el competente para otorgar la autorización judicial:

- a) El del lugar del lugar donde resida la persona afectada por el internamiento.
- b) El del lugar del establecimiento donde se ingrese a la persona afectada.
- c) El del lugar donde la persona haya provocado algún incidente o situación que muestre su trastorno psíquico o anómalo.
- d) El del lugar donde residan los padres o tutores del mismo.

45. La acción de reclamación de filiación no matrimonial, cuando falte la respectiva posesión de estado, a quien corresponderá:

- a) Exclusivamente al hijo durante toda su vida.
- b) Al hijo durante un plazo de cuatro años contado desde que tuvo conocimiento de los hechos en que hayan de basar su reclamación, así como a los progenitores en



el plazo de un año desde que tuvo conocimiento de los hechos en que hayan de basar dicha reclamación.

- c) Al hijo durante toda su vida y a los progenitores en el plazo de un año contado desde que tuvo conocimiento de los hechos en que hayan de basar su reclamación.
- d) Al hijo y a los progenitores durante toda su vida, así como a sus herederos aunque no hayan iniciado la acción.

46. En relación a la estructura del Código Penal. ¿Cuántos títulos tiene el Libro Segundo (II) "Delitos y sus penas" de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal?:

- a) 3
- b) 18
- c) 30
- d) 24

47. Cuando existe un dolo eventual en las siguientes situaciones:

- a) Aquella persona que aun sabiendo el resultado y el daño que puede provocar una determinada acción, continúa haciéndolo y no descarta el resultado que puede llegar a ocurrir. Acepta el resultado y lo ve como posible.
- b) Aquella persona que desconociendo el resultado y el daño que puede provocar una determinada acción, continua haciéndolo. No acepta el resultado, ni lo ve posible.
- c) Aquella persona que es consciente de lo que hace y busca el resultado.
- d) Aquella persona que no tiene intención de hacer el resultado ni siquiera como posible pero realiza la acción punible.

48. El Código Penal en su artículo 28, mantiene un concepto extensivo respecto del término autor, cuál de los siguientes no se incluiría bajo el mismo a:

- a) El coautor.
- b) El cómplice.
- c) El inductor.
- d) El cooperador ejecutivo necesario.

49.Cuál de las siguientes medidas no se reputa penas:

- a) La detención y prisión preventiva y las demás medidas cautelares de naturaleza penal.
- b) La localización permanente.
- c) La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa.
- d) Prisión permanente revisable.

50.Cuál de las siguientes no son penas privativas de derechos según el artículo 39 del Código Penal:

- a) La inhabilitación absoluta.



- b) La inhabilitación parcial.
- c) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
- d) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.

51. Cuando hay reincidencia según el artículo 22.8 Código Penal:

- a) Cuando al delinquir el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título de este código, siempre que sea de la misma naturaleza.
- b) Cuando al delinquir el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por más de tres delitos comprendidos en el mismo título de este código, siempre que sea de la misma naturaleza.
- c) Cuando al delinquir el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por dos delitos comprendidos en el mismo título de este código, aunque sean de distinta naturaleza.
- d) Cuando al delinquir el culpable haya sido condenado por sentencia judicial firme por un delito comprendido en el mismo título de este código e igual naturaleza.

52.Cuál de las siguientes personas no son responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente según el artículo 120 del Código Penal:

- a) Los curadores con facultades de representación plena que convivan con la persona a quien prestan apoyo, siempre que haya por su parte culpa o negligencia.
- b) Las personas naturales o jurídicas titulares de editoriales, periódicos, revistas, estaciones de radio o televisión o de cualquier otro medio de difusión escrita, hablada o visual, por los delitos cometidos utilizando los medios de los que sean titulares, dejando a salvo lo dispuesto en el artículo 212.
- c) Las personas naturales o jurídicas, en los casos de delitos cometidos en los establecimientos de los que sean titulares, cuando por parte de los que los dirijan o administren, o de sus dependientes o empleados, se hayan infringido los reglamentos de policía o las disposiciones de la autoridad que estén relacionados con el hecho punible cometido, de modo que éste no se hubiera producido sin dicha infracción.
- d) Las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores, cuando no desempeñaban sus obligaciones o servicios.

53. Según el artículo 56 Código Penal en las penas de prisión inferiores a diez años, los jueces o tribunales impondrán, atendiendo a la gravedad del delito, como penas accesorias, alguna o algunas medidas, cuál de las siguientes no se contempla en como pena accesoria:

- a) Suspensión de empleo o cargo público.
- b) Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
- c) Inhabilitación especial para el derecho de sufragio activo durante el tiempo de la condena.



- d) Inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria, comercio, ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento o cualquier otro derecho, la privación de la patria potestad, si estos derechos hubieran tenido relación directa con el delito cometido, debiendo determinarse expresamente en la sentencia esta vinculación, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en el artículo 579 de este Código.

54. Qué pena contempla el Código Penal para el delito de sustracción de menores en el artículo 225 bis:

- a) Prisión de seis meses a un año e inhabilitación especial.
- b) Prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial.
- c) Prisión de uno a dos años e inhabilitación especial.
- d) Multa de seis a doce meses e inhabilitación especial.

55. Qué artículo del Código Penal regula el delito de maltrato habitual dentro del ámbito de la violencia de género:

- a) Artículo 173
- b) Artículo 153
- c) Artículo 163
- d) Artículo 156

56. En el contexto del delito de prevaricación, según el artículo 449 Código Penal que significa “retardo malicioso”.

- a) La demora intencionada con ánimo de beneficiar a una parte.
- b) El retardo provocado por un juez o magistrado solo para beneficiar a terceros.
- c) El retardo por parte de un juez o fiscal.
- d) El retardo provocado para conseguir cualquier finalidad ilegítima.

57. A los efectos penales quien se reputará autoridad:

- a) Al que por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia.
- b) Los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y del Parlamento Europeo.
- c) A los funcionarios del Ministerio Fiscal.
- d) Todas las anteriores son correctas.

58. Conforme al artículo 184 del Código penal será castigados como autor de acoso sexual:

- a) El que solicite favores de naturaleza sexual para sí, en el ámbito de una relación laboral y docente y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación subjetiva que considere intimidatoria, hostil o humillante.



- b) El que solicite favores de naturaleza sexual para un tercero, en el ámbito de una relación laboral y docente y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación subjetiva que considere intimidatoria, hostil o humillante.
- c) El que solicite favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación laboral y docente y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación subjetiva que considere intimidatoria, hostil o humillante.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

59. Incurre en delito de prevaricación según el artículo 405 y 406 del Código Penal:

- a) La autoridad o funcionario público, que en ejercicio de sus atribuciones y a sabiendas de su ilegalidad, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello.
- b) La autoridad o funcionario público, que en ejercicio de su cargo y a sabiendas de su ilegalidad, designare, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello.
- c) La autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

60. En el procedimiento penal sumario, si el informe pericial es elaborado por un solo perito en lugar de por dos incumpliendo el artículo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:

- a) La prueba pericial es inválida, pues la duplicidad de peritos es un requisito esencial en el procedimiento sumario.
- b) La prueba pericial es válida, pues la duplicidad de peritos no es un requisito esencial en el procedimiento sumario.
- c) La prueba pericial es inválida, pues afecta a la tutela judicial efectiva.
- d) La prueba pericial es válida, aunque el único perito no ratifique su informe.

61. Diga cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:

- a) El procedimiento sumario, común u ordinario, se tramita cuando la pena por el delito investigado supera en concreto conforme lo solicitan las partes, los nueve años de prisión.
- b) El procedimiento sumario, común u ordinario, se tramita cuando la pena por el delito investigado supera en abstracto los nueve años de prisión.
- c) El procedimiento abreviado se tramita cuando la pena por el delito investigado no supera en abstracto los nueve años de prisión.
- d) El procedimiento sumario, común u ordinario, se aplica supletoriamente al procedimiento abreviado en lo no previsto en éste.



62. Un delito leve de amenazas en el ámbito familiar deberá ser tramitado:

- a) Por los trámites del Juicio Rápido por delito (iniciado por diligencias urgentes, artículos 795 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.)
- b) Por los trámites del procedimiento para el enjuiciamiento de delitos leves del artículo 962 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
- c) Por los trámites del procedimiento sumario.
- d) Deberá ser archivado por el Juzgado, al no ser constitutivo de delito las amenazas leves en el ámbito familiar tras la supresión de las antiguas faltas.

63. Si un menor de 16 años es condenado por un delito intentado (tentativa) de agresión sexual:

- a) No es aplicable el artículo 10. 2 b) de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero reguladora de la responsabilidad penal de los menores (internamiento en régimen cerrado y libertad vigilada) pues se trata de un delito intentado.
- b) Sí es aplicable la cláusula del artículo 10. 2 b) de la LORPM pues incluye también las formas intentadas de los delitos mencionados en este precepto.
- c) No es aplicable la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
- d) Al ser un delito intentado y tratarse de un menor, deberá ser en todo caso absuelto.

64. Conforme a lo dispuesto expresamente en el artículo 12.1 de Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución:

- a) Cualquier persona.
- b) La persona acosada.
- c) Las personas físicas y jurídicas con interés legítimo, determinadas en las Leyes reguladoras de estos procesos.
- d) La mujer, incluso tras la terminación de la relación en la que se produjo la discriminación.

65. Los principios inspiradores del Plan de Igualdad del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz y sus Organismos Autónomos son:

- a) Acceso al empleo y contratación de personal, promoción profesional interna, prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, igualdad y no discriminación por orientación e identidad sexual, expresión de género y/o las características sexuales.
- b) Gobernanza, transversalidad, redefinición de los modelos de gestión, transformación social, empoderamiento femenino e interseccionalidad.
- c) Igualdad entre hombres y mujeres, no discriminación por razón de género, respeto a la diversidad y sostenibilidad social.
- d) Conciliación corresponsable, formación y sensibilización en materia de igualdad de género y comunicación incluyente y no sexista.



- 66. El artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género regula una ayuda económica de pago único que recibirán las víctimas de violencia de género:**
- a) Cuando careciesen de rentas superiores, en cómputo mensual, al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.
 - b) Cuando careciesen de rentas superiores, en cómputo mensual, al 65 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.
 - c) Cuando careciesen de rentas superiores, en cómputo mensual, al 75 por 100 del IPREM, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.
 - d) Cuando careciesen de rentas superiores, en cómputo mensual, al 65 por 100 del IPREM, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.
- 67. Isabel, nacida en Jerez de la Frontera, interpone una denuncia en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de la ciudad de Cádiz frente a su esposo, por pegarle una bofetada. Hechos ocurridos cuando ambos vivían en la ciudad de Málaga, pues Isabel, al cabo de un tiempo, decidió irse a vivir a Cádiz con su hermana. ¿Qué Juzgado de Violencia sobre la Mujer es el competente territorialmente?**
- a) Cádiz.
 - b) Málaga.
 - c) Cádiz o Málaga. Cualquiera de los dos.
 - d) Jerez de la Frontera.
- 68. Conforme al artículo 4 del Real Decreto 1618/2007 de 7 de diciembre sobre Organización y Funcionamiento del Fondo de Garantía del pago de alimentos son beneficiarios del mismo:**
- a) Los menores de edad españoles titulares de un derecho de alimentos judicialmente reconocido e impagado.
 - b) Los menores de edad nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea residentes en España y titulares de un derecho de alimentos judicialmente reconocido e impagado.
 - c) Cualquier menor de edad residente en España y titular de un derecho de alimentos judicialmente reconocido e impagado en cualquier caso.
 - d) Las respuestas a) y b) son correctas.
- 69. Conforme al artículo 24 del Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, cuando el Estado se subrogue de pleno derecho, hasta el total importe de los pagos satisfechos al interesado, dicho importe tiene la consideración de derecho:**



- a) De naturaleza pública, y su cobranza se efectuará de acuerdo con lo previsto en la Ley General Presupuestaria. Su recaudación en periodo ejecutivo se realizará mediante el procedimiento administrativo de apremio.
- b) De naturaleza privada, y su cobranza se efectuará a través del procedimiento civil declarativo que corresponda a instancias de la Abogacía del Estado.
- c) De naturaleza mixta: tanto pública como privada. Y su recaudación será en todo caso a través del procedimiento civil declarativo que corresponda a instancias de la Abogacía del Estado.
- d) De naturaleza mixta: tanto pública como privada. Y su recaudación podrá realizarse a través del procedimiento civil declarativo que corresponda a instancias de la Abogacía del Estado o en periodo ejecutivo, mediante el procedimiento administrativo de apremio.

70. Conforme al artículo 2h) de la Ley 1/1996 de 10 de Enero de Asistencia Jurídica Gratuita, con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita:

- a) A las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas y a las personas menores de edad cuando sean víctimas de delitos de homicidio y de lesiones de los artículos 149 y 150.
- b) A las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, así como a las personas menores de edad y las personas con discapacidad necesitadas de especial protección cuando sean víctimas de delitos de homicidio, de lesiones de los artículos 149 y 150 y en el delito de maltrato habitual previsto en el artículo 173.2.
- c) A las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, así como a las personas con discapacidad necesitadas de especial protección cuando sean víctimas de delitos de homicidio, de lesiones de los artículos 149 y 150, en el delito de maltrato habitual previsto en el artículo 173.2, en los delitos contra la libertad, en los delitos contra la libertad sexual y en los delitos de trata de seres humanos. También se reconoce este derecho, a las mujeres y personas menores de edad que sean víctimas de los delitos contra la libertad sexual previstos en el título VIII del libro II del Código Penal, los delitos de mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual, si bien su entrada en vigor no se producirá hasta el 3 de octubre de 2025.
- d) Sólo a las víctimas de violencia de género.

71. La resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, denegando el derecho a la asistencia jurídica gratuita puede ser impugnada por el interesado presentando escrito:

- a) Ante el secretario de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, resolviendo éste. Contra su decisión, cabrá recurso administrativo potestativo de reposición.



- b) Ante el secretario de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, resolviendo el juzgado o tribunal.
- c) Directamente ante el juzgado o tribunal competente o ante el Juez Decano para su reparto, si el procedimiento no se hubiera iniciado.
- d) Directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del partido judicial donde resida el interesado.

72. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto número 67/2008 de Consejería de Justicia y Administración Pública, de 26 febrero por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía:

- a) Las víctimas de violencia de género pueden acceder a la libre elección de Letrado o Letrada de entre los incluidos en el turno especializado de Violencia de Género.
- b) Las víctimas de violencia de género podrán solicitar una segunda opinión en el caso de que estén disconformes con la estrategia procesal seguida por el letrado o letrada de oficio designado y siempre antes de la efectiva actuación procesal planteada.
- c) La solicitud de segunda opinión sólo se podrá realizar una única vez para todos los procesos o procedimientos derivados del mismo acto de violencia.
- d) Todas las opciones anteriores son correctas.

73. Conforme a lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, así como los artículos 449 bis y 449 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la prueba preconstituida en menores de catorce años para evitar la victimización secundaria en un procedimiento penal seguido por un delito de lesiones:

- a) Es imperativa.
- b) Es facultativa del Juez/Magistrado. Pero en todo caso deberá razonarlo.
- c) Dependerá de lo solicitado por el Ministerio Fiscal, al ser menor de edad.
- d) Nunca puede acordarse prueba constituida.

74. Tal y como dispone el artículo 5 de la Ley 35/1995 de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, la ayuda pública allí regulada:

- a) No será compatible con carácter general con la percepción de las indemnizaciones por daños y perjuicios causados por el delito, que se establezcan mediante sentencia.
- b) Será compatible en todo caso con las indemnizaciones o ayudas económicas a que el beneficiario de las mismas tuviera derecho a través de un sistema de seguro privado.
- c) Será incompatible con cualquier pensión pública que el beneficiario tuviera derecho a percibir, en los supuestos de lesiones o daños determinantes de incapacidad permanente o muerte de la víctima.
- d) La respuesta a y c son correctas.



75. Cuantos ejes de actuación se contienen en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 13 de mayo de 2019?

- a) 9
- b) 12
- c) 10
- d) 11

76. Respecto de las mujeres extranjeras no comunitarias víctimas de violencia de género y en situación irregular en España, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social prevé que (SEÑALE LA INCORRECTA):

- a) Aunque del procedimiento penal concluido no pudiera deducirse la situación de violencia de género o sexual, no se incoará el expediente administrativo sancionador por infracción del artículo 53.1.a).
- b) No se incoará el procedimiento administrativo sancionador por encontrarse irregularmente en territorio español, cuando esta situación se ponga de manifiesto al interponer la denuncia.
- c) Se suspenderá el procedimiento administrativo sancionador que se hubiese incoado por estancia irregular en el territorio español con anterioridad a la interposición de la denuncia.
- d) Podrán solicitar una autorización de residencia por circunstancias excepcionales a favor de sus hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades.

77. De conformidad con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, respecto de la funcionaria víctima de violencia de género (SEÑALE LA INCORRECTA):

- a) Las faltas de asistencia, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda.
- b) Tendrá derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución en todo caso.
- c) Tendrá derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma.
- d) Tendrá derecho a la reordenación del tiempo de trabajo en los términos que para estos supuestos establezca el plan de igualdad de aplicación o, en su defecto, la Administración pública competente en cada caso.

78. Como establece el Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, las trabajadoras por cuenta ajenas víctimas de violencia de género para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral tendrán derecho a: (SEÑALE LA INCORRECTA)



- a) La reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional de su salario.
- b) La reordenación del tiempo de trabajo a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo.
- c) La suspensión del contrato de trabajo por un periodo inicial de seis meses con prorrogas de tres meses con un máximo de veinticuatro meses.
- d) Percibir la prestación de desempleo durante el tiempo de suspensión del contrato.

79. La Orden Europea de Protección se puede dictar:

- a) Solo por autoridades judiciales europeas tras la constatación de que existen actos delictivos que puedan poner en peligro la libertad individual o integridad sexual de la víctima.
- b) Solo a instancia de la persona protegida y previa comprobación de que la medida de protección cumple los requisitos exigidos en la Directiva 2011/99/UE.
- c) Aunque aún no se haya adoptado en el Estado de emisión una medida de protección que imponga a la persona causante del peligro una o varias de las prohibiciones o restricciones previstas en la Directiva 2011/99/UE.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

80. La autoridad competente del Estado de ejecución puede denegar el reconocimiento de una orden europea de protección:

- a) Cuando no se cumplan los requisitos de la Directiva.
- b) Cuando esté incompleta.
- c) Cuando el reconocimiento vulnere el principio no bis in idem.
- d) Todas las anteriores son correctas.

81. Respecto a las medidas de protección en materia civil dictadas por un Estado miembro de la Unión Europea:

- a) Se requieren una declaración de ejecutoriedad para su reconocimiento en el país de destino.
- b) Con independencia de la duración de la medida de protección, los efectos del reconocimiento por el Estado requerido se limitará a un período de doce meses a partir de la fecha de expedición del certificado.
- c) La duración de los efectos del reconocimiento por el Estado requerido serán los establecidos en el certificado expedido en el Estado miembro de origen.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

82. El certificado de reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil regulado en el Reglamento UE 606/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de junio de 2013 puede expedirse:

- a) Previo a la notificación de la medida de protección a la persona causante del riesgo conforme al Derecho del Estado miembro de origen.



- b) Cuando la medida de protección se haya dictado en rebeldía si se hubiera notificado a la persona causante del riesgo del documento que haya iniciado el procedimiento o un documento equivalente.
- c) Aunque la persona causante del riesgo no hubiera podido impugnar la medida.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

83. La orden de protección de víctimas de violencia doméstica la dictará el Juez de instrucción cuando aprecie indicios fundados de delito de esta índole contra:

- a) Quien sea o haya sido cónyuge o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia.
- b) Los menores o personas con discapacidad que convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o del conviviente.
- c) Los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente.
- d) Todas las anteriores son correctas.

84. La orden de protección de víctimas de violencia doméstica podrá solicitarse:

- a) Exclusivamente ante el Juez de instrucción o el Ministerio Fiscal.
- b) Solo ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al interponer la denuncia.
- c) En las oficinas de atención a la víctima o los servicios sociales o instituciones asistenciales dependientes de las Administraciones pública.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

85. Las medidas de carácter civil contenidas en la orden dictada por el Juez de instrucción para la protección de víctimas de violencia doméstica tendrán una vigencia temporal de:

- a) Diez días hábiles.
- b) Diez días y si dentro de este plazo fuese incoado a instancia de la víctima o de su representante legal un proceso de familia ante la jurisdicción civil, las medidas adoptadas permanecerán en vigor durante los diez días siguientes a la presentación de la demanda.
- c) Los días que determine la autoridad judicial mediante resolución motivada en el interés superior del menor y previa evaluación de la situación de la relación paterno-filial.
- d) Treinta días y si dentro de este plazo fuese incoado a instancia de la víctima o de su representante legal un proceso de familia ante la jurisdicción civil, las medidas adoptadas permanecerán en vigor durante los treinta días siguientes a la presentación de la demanda.



86. Entre las funciones del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres se encuentra:

- a) Representar a la Administración de la Junta de Andalucía ante las organizaciones de mujeres andaluzas en las políticas de aplicación de la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
- b) Dictar a la Consejería competente en materia de igualdad las medidas e iniciativas que estime necesarias para el impulso y la promoción de la participación de las mujeres en la vida política, económica, cultural y social de Andalucía.
- c) Elaborar informes vinculantes sobre disposiciones de carácter general que proponga al Consejo de Gobierno la Consejería competente en materia de Igualdad.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

87. Entre las funciones de los Centros Municipales de Información a la Mujer en Andalucía se encuentra:

- a) Prestar asesoramiento jurídico en todos los ámbitos del Derecho, siempre que de su aplicación se derive una situación de desigualdad o discriminatoria para las mujeres, poniendo a su disposición los medios legales y recursos existentes.
- b) Prestar asistencia integral y asesoramiento especializado a mujeres víctimas de violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones.
- c) Promocionar la participación y presencia de las mujeres en la vida política, cultural y social.
- d) Todas las anteriores son correctas.

88. La Prestación económica a los hijos e hijas menores de edad de las mujeres víctimas mortales como consecuencia de violencia de género:

- a) Es incompatible con la prestación de orfandad.
- b) Requiere no tener ingresos suficientes entendiéndose esta carencia cuando no se disponga de rentas o ingresos personales superiores a la cuantía establecida para las prestación no contributivas que regula el el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
- c) Tiene una cuantía fija anual revisable conforme al Índice de Precios al Consumo hasta el año en que el beneficiario alcance la mayoría de edad inclusive.
- d) Su cuantía anual es el 80 % del IPREM incrementado en una sexta parte.

89. El Protocolo para la Prevención del Acoso Sexual y por Razón de Sexo del Instituto Andaluz de la Mujer:

- a) Es el protocolo de inmediata aplicación y obligado cumplimiento en empresas cuando no hayan aprobado uno específico.
- b) Es el Protocolo de prevención y actuación de la administración de la Junta de Andalucía en los casos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación.
- c) Solo es aplicable al personal de la plantilla de la empresa.



- d) Es un modelo de protocolo que las empresas pueden acordar con sus trabajadoras y trabajadores.

90. La acreditación o título habilitante, con efectos administrativos, de las situaciones de violencia de género en los términos del artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, a los efectos de lo previsto en el artículo 23 de la misma, es una competencia administrativa que en Andalucía corresponde a:

- a) El Instituto Andaluz de la Mujer.
- b) El Instituto Andaluz de la Mujer y a los Centros Municipales de Información de la Mujer.
- c) El Instituto Andaluz de la Mujer, a los Centros Municipales de Información de la Mujer y a los Servicios Sociales Comunitarios.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

91. Para acceder a los servicios de los Centros de Asistencia Integral 24 horas a víctimas de violencia sexual:

- a) Es necesario haber denunciado previamente la agresión.
- b) Debe denunciar la agresión en el plazo de 24 horas desde el acceso a los servicios que se prestan en estos centros.
- c) No es necesaria la interposición de denuncia para facilitar la atención e intervención.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

92. Son competencias propias de las entidades locales de Andalucía en materia de servicios sociales:

- a) Las competencias generales establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
- b) Las así se determinan en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
- c) Las que así estén definidas por la normativa sectorial.
- d) Todas las anteriores son correctas.

93. ¿Es gratuita la mediación familiar en Andalucía?

- a) Sí, es un servicio que financia la Junta de Andalucía que tiene como finalidad que las partes en conflicto alcancen acuerdos equitativos, justos, estables y duraderos, contribuyendo así a evitar la apertura de procedimientos judiciales, o, en su caso, contribuir a la resolución de los ya iniciados.
- b) Es gratuita si alguna de las partes cumple los requisitos económicos establecidos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, y demás normas aplicables.
- c) Es gratuita solo para aquella parte que cumpla los requisitos económicos establecidos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, y demás normas aplicables.



- d) No, pero los honorarios profesionales de las personas inscritas en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía que intervengan están determinados reglamentariamente.

94. El Deber de Comunicación Cualificado, legalmente exigible a las personas que por razón de su cargo, profesión, oficio o actividad, tengan encomendada la asistencia, el cuidado, la enseñanza o la protección de niños, niñas o adolescentes y, en el ejercicio de las mismas, hayan tenido conocimiento, o adviertan indicios, de la existencia de una posible situación de violencia de una persona menor de edad, supone la comunicación inmediata a:

- a) A los Servicios Sociales competentes.
- b) Al Ministerio Fiscal.
- c) A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
- d) A los servicios sociales competentes y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y/o al Ministerio Fiscal cuando de la violencia pudiera resultar que la salud o la seguridad del niño, niña o adolescente se encontrase amenazada.

95. ¿Los servicios sociales de las entidades locales de Andalucía deben aplicar durante el proceso de intervención el Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo, desprotección y desamparo de la infancia y adolescencia denominado VALÓRAME?

- a) Sí, exclusivamente deben utilizar este instrumento para valorar estas situaciones.
- b) Sí, sin perjuicio del uso de otros instrumentos que se estimen necesarios, para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo, desprotección y desamparo de la infancia y adolescencia.
- c) No necesariamente, aunque es un protocolo de actuación recomendado.
- d) No, depende de criterio técnico personal sobre la oportunidad de su utilización.

96. El procedimiento de actuación ante situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía (SIMIA) es un procedimiento unificado para la detección, notificación, valoración y registro de casos de violencia sufrida por menores...

- a) Cualquiera que sea el presunto agresor.
- b) Que solo se pone en marcha si asistencias sanitarias se constatan indicios de maltrato hacia menores.
- c) Que se aplica a situaciones de riesgo o desamparo vinculadas al ejercicio de los deberes de protección de los menores por parte de sus padres, madres, personas tutoras o guardadoras.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.



97. ¿Es necesario haber presentado reclamación previa en vía administrativa para formular oposición, ante los tribunales civiles, a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores?

- a) Sí, solo cuando la resolución administrativa sea firme se podrá formular demanda civil de oposición.
- b) Sí, pero se podrá formular demanda civil de oposición a la resolución administrativa desde que reclamación previa se pueda considerar desestimada por silencio administrativo.
- c) No, y el escrito inicial de oposición podrá presentarse en un plazo máximo de seis meses desde la notificación de la resolución administrativa.
- d) No, y el escrito inicial de oposición podrá presentarse en un plazo máximo de tres meses desde la notificación de la resolución administrativa.

98. ¿Quiénes tienen derecho con carácter general a las prestaciones y servicios previstos en la Ley 6/1999, de 7 de julio, de atención y protección a las personas mayores?

- a) Todas las personas con sesenta y cinco o más años.
- b) Solo las personas mayores de sesenta y cinco años que tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Andalucía.
- c) Las personas mayores de sesenta y cinco años que, conforme al Estatuto de Autonomía, tengan la condición de andaluces, los extranjeros, apátridas, o refugiados con residencia en cualquier municipio de Andalucía conforme a normas, tratados y convenios internacionales o a condición de reciprocidad y aquellas otras personas mayores de sesenta años que se encuentren en reconocido estado de necesidad.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

99. Pueden ser titulares de los derechos establecidos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia:

- a) Los que se encuentren en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.
- b) Los españoles residentes en España que se encuentren en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.
- c) Los españoles residentes en España que se encuentren en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos siempre que haya sido residentes en España durante cinco años, de los cuales dos deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, salvo que sea menor de cinco años, en cuyo caso el periodo de residencia se exigirá a quien ejerza su guarda y custodia.
- d) Los españoles residentes en la Unión Europea que se encuentren en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos siempre que haya sido residentes en territorio de la UE durante cinco años, de los cuales dos deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, salvo que sea menor de cinco años, en cuyo caso el periodo de residencia se exigirá a quien ejerza su guarda y custodia.



100. En materia de régimen local, el artículo 60 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, menciona lo siguiente:

- a) Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de régimen local que, respetando el artículo 149.1.19.^a de la Constitución y el principio de autonomía local.
- b) Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de régimen local que, respetando el artículo 149.1.18.^a de la Constitución y el principio de autonomía local.
- c) Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en materia de régimen local que, respetando el artículo 149.1.18.^a de la Constitución y el principio de autonomía local.
- d) Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en materia de régimen local que, respetando el artículo 149.1.19.^a de la Constitución y el principio de autonomía local.

RESERVAS

101. Conforme al artículo 142 de la Constitución Española:

- a) Las Haciendas locales dispondrán de los medios necesarios para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.
- b) Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos autonómicos y de participación en los del Estado.
- c) Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.
- d) Las Haciendas locales dispondrán de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la Constitución atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

102. Señala la afirmación correcta. El Consejo Europeo:

- a) Representa a los ciudadanos de los Estados de la UE y es elegido directamente por ellos.
- b) Define la orientación política general y las prioridades de la Unión Europea.
- c) Representa a los Gobiernos de los Estados miembros.
- d) Representa los intereses comunes de la Unión y es su principal órgano ejecutivo.



- 103. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿Qué recursos se pueden interponer contra cualquier acto de trámite?**
- a) El de alzada exclusivamente.
 - b) El de alzada o el potestativo de revisión.
 - c) El de alzada o el potestativo de reposición.
 - d) Todas las anteriores son incorrectas.
- 104. La reforma del artículo 49 Constitución Española entró en vigor:**
- a) El día 15 de febrero de 2024.
 - b) El día 16 de febrero de 2024.
 - c) El día 17 de febrero de 2024.
 - d) El día 18 de febrero de 2024
- 105. Conforme al artículo 139.1 del Código Penal, ¿cual de las siguientes circunstancia no se recoge para su consideración como reo de asesinato?:**
- a) Con alevosía.
 - b) Con premeditación.
 - c) Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido.
 - d) Para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra.
- 106. Qué tipo penal establece el artículo 172.2 del Código Penal en el ámbito de la violencia de género:**
- a) Coacciones leves
 - b) Amenazas leves
 - c) Amenazas condicionales
 - d) Coacciones graves
- 107. Conforme al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, cuando en el mismo se utiliza el término “Mujer”:**
- a) No incluye a menores de 18 años.
 - b) Sí incluye a menores de 18 años.
 - c) Se refiere a quienes hayan alcanzado la mayoría de edad conforme a la legislación de los países que lo suscriben.
 - d) Se refiere a quienes tengan cumplidos al menos 16 años.



- 108. A las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género que se ven obligadas a cesar en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral:**
- a) Se les suspenderá la obligación de cotización durante un período de seis meses, que serán considerados como de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social.
 - b) Se les suspenderá la obligación de cotización durante un período de un año, que no será considerado como de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social
 - c) Se les suspenderá la obligación de cotización durante un período de seis meses, que no serán considerados como de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social.
 - d) Se les suspenderá la obligación de cotización durante un período de un año, que será considerado como de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social.
- 109. Miguel, de nacionalidad española, viajero ocupante del tren que une Cádiz y Madrid, llama a la policía dando cuenta de que durante el trayecto oyó a otro viajero que se sentó a su lado -que resultó ser Bartolomé, de nacionalidad española- decir por teléfono que había realizado algo grave a su pareja, -llamada Ariadna, de nacionalidad portuguesa-, utilizando unas tijeras y que su intención era huir a Marsella. Agentes de la Policía Local de Cádiz, procedieron a la detención de Bartolomé, en la estación de Renfe de Segunda Aguada. Solicitada a la persona detenida datos de su pareja, a la que hacía referencia en su llamada, resultó ser Ariadna, la cual, sufrió heridas leves con abrasiones y contusiones por hechos ocurridos en la localidad de Montargil -Portugal-, lugar donde reside la víctima. Indique qué órgano judicial tiene competencia para enjuiciar tales hechos:**
- a) El Juzgado de lo Penal de Cádiz.
 - b) El Juzgado de lo Penal que corresponda en Portugal.
 - c) La Audiencia Nacional.
 - d) El Juzgado de lo Penal de Madrid.
- 110. El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica de 11 de mayo de 2011, ratificado por España entró en vigor:**
- a) El día 18 de marzo de 2014.
 - b) El día 10 de abril de 2014.
 - c) El día 1 de agosto de 2014.
 - d) El día 24 de septiembre de 2014.